

# ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19<sup>na.</sup> Asamblea  
Legislativa

7<sup>ma.</sup> Sesión  
Ordinaria

## SENADO DE PUERTO RICO

### **P. del S. 1429**

20 de febrero de 2024

Presentado por la señora *Rodríguez Veve*

*Referido a la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico*

#### **LEY**

Para establecer la “Ley para Uniformar la Evaluación de Solicitudes de Licencias Ocupacionales por Personas con Antecedentes Penales” con el propósito de establecer una política pública con parámetros uniformes para la evaluación de otorgación de licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales, implementar un proceso de calificación previa que le permita a las personas con antecedentes penales conocer con anterioridad si las circunstancias particulares de su caso son un impedimento para la obtención de la licencia ocupacional a la que aspiran solicitar.

#### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La oportunidad de ganarse la vida es indispensable para la rehabilitación de cualquier ciudadano que haya cometido delito. Sin embargo, en Puerto Rico la mayoría de las distintas Juntas Examinadoras creadas por ley para regular los procesos de otorgación y renovación de licencias ocupacionales incluyen en sus leyes habilitadoras o reglamentos, prohibiciones relacionadas a la otorgación y renovación de licencias por razón de tener antecedentes penales.

Las licencias ocupacionales constituyen un tipo de reglamentación aprobada por los estados, que imponen un mínimo de requisitos para que las personas puedan ejercer una ocupación. Las investigaciones sugieren que el empleo es un factor clave para reducir el riesgo de que una persona se involucre en nuevas actividades delictivas,

incurra en reincidencia o vuelva a ser encarcelada. El acceso a un empleo remunerado es clave para una reinserción efectiva de estas personas a la sociedad.

En los EE. UU., más del 80% de las personas privadas de la libertad con antecedentes penales reinciden o vuelven a ser detenidos dentro de los ocho (8) años siguientes a su reinserción a la sociedad. La reincidencia criminal no tan sólo es un problema social para las víctimas, sino que a su vez crea problemas complejos para el sistema judicial y correccional, debilita las instituciones civiles, separa a las familias, reduce la productividad económica y malgasta el dinero de los contribuyentes. No obstante, un empleo estable y remunerado reduce la probabilidad de que una persona se dedique a actividades delictivas. Varios estudios han identificado una relación entre las restricciones a la concesión de licencias ocupacionales, los delitos contra la propiedad y la reincidencia. Se ha demostrado mediante investigaciones que estados con más regulaciones ocupacionales tienen índices mayores de reincidencia criminal, pues la reglamentación excesiva impide el acceso a muchas profesiones. Los estados con las cargas más onerosas sobre las licencias ocupacionales presenciaron un aumento de nueve (9%) por ciento en reincidencia criminal, comparado con un promedio de dos punto seis (2.6%) por ciento entre 1997 y 2007.

Como ejemplo, en el 2014, se calcula que por tener antecedentes penales se le privó de empleo a alrededor de 1.7 millones de trabajadores de la población activa, a un costo de al menos \$78,000 millones para la economía de los EE. UU. Además, privar de licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales les impide a muchos tener la capacidad de crear sus propias empresas dentro de un sector autorizado, lo que ahoga el espíritu empresarial y la creación de nuevas empresas. En efecto, a las personas con antecedentes penales no tan sólo se les priva de la oportunidad de ser contratados como empleados, sino que, a su vez, no se les permite ser sus propios patronos, impidiéndoseles ejercer algún oficio que requiera una licencia ocupacional para llevarlo a cabo.

Desde el 2015, 40 Estados y Washington D.C. han flexibilizado o eliminado en su totalidad las barreras para la concesión de licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales. Según el *Institute for Justice*, en su estudio publicado en agosto del 2020 "Barred from Working: A Nationwide Study of Occupational Licensing Barrier for Ex-Offenders", 21 estados y Washington D.C., una persona con antecedentes penales puede petitionar una licencia ocupacional en cualquier momento, incluyendo antes de matricularse en cualquier adiestramiento obligatorio, para determinar si sus antecedentes lo inhabilitarían para obtener su licencia. En este estudio se encontró que 18 estados impiden que las Juntas Examinadoras usen normas ambiguas para denegar licencias a personas con antecedentes penales. Cuatro (4) estados y el Distrito de Columbia eliminaron los requisitos de carácter moral de muchas de sus licencias, pero no promulgaron una prohibición general. Veinte (20) estados y el Distrito de Columbia impiden a sus Juntas Examinadoras el denegar a personas con antecedentes penales una licencia para trabajar, a menos que la Junta determine que los antecedentes penales del solicitante están "directamente relacionados" con la licencia solicitada. Veinte (20) estados y Washington, D.C. prohíben que las Juntas consideren las detenciones que no hayan provocado una condena. Trece (13) estados prohíben que las Juntas tomen en cuenta antecedentes que se produjeron hace mucho tiempo, aunque estos plazos no suelen aplicarse a delitos violentos o sexuales. Dieciocho (18) estados y Washington, D.C. prohíben a las Juntas Examinadoras utilizar expedientes anulados, borrados, expurgados, sellados o eliminados para descalificar a los solicitantes.

A su vez, en el estado de Ohio (HB 263) y Washington D.C. (Act A23-0561), aprobaron a principios del 2021, reformas adicionales sobre la consideración de antecedentes penales por parte de las agencias de concesión de licencias ocupacionales. El *Collateral Consequences Resource Center* (CCRC), una organización sin fines de lucro creada en el año 2014 para promover la participación pública en las innumerables cuestiones que plantean las restricciones legales y el estigma social que pesan sobre las personas con antecedentes penales expresó que "[d]e todas las reformas de los registros

de antecedentes penales promulgadas durante esta era moderna de reforma de la reinserción, ninguna otra se aproxima a la regulación de las agencias de licencias ocupacionales en términos de amplitud, coherencia y probable eficacia".

Para atender estas situaciones, es necesario evaluar de forma individualizada cada caso. De manera tal que las restricciones a la concesión de licencias ocupacionales deben considerar la naturaleza del delito cometido, así como su relación con los deberes y responsabilidades de la ocupación. Por lo tanto, deben eliminarse de las leyes y reglamentos aquellos términos generales y ambiguos que abren las puertas al trato dispar o a la arbitrariedad en la otorgación de licencias. Lo anterior, predicado en una política pública de transparencia y justicia donde a quienes se les deniegue la capacidad de ejercer una ocupación tengan el derecho a una explicación clara y razonable de la razón para la denegatoria, reduciendo la incertidumbre.

A su vez, las autoridades responsables de la concesión de licencias deben establecer procesos vinculantes de calificación previa para que los solicitantes puedan determinar si sus antecedentes penales les impiden obtener la licencia antes de invertir en la formación, la educación y los costos relacionados. Por eso, con esta medida se busca: (a) establecer parámetros claros que dirijan los procesos de evaluación de personas con antecedentes penales en la otorgación de licencias ocupacionales por parte de las Juntas Examinadoras, eliminando prohibiciones generales y ambiguas que denieguen las licencias por cualquier antecedente penal, acusación o proceso penal previo; (b) otorgar la oportunidad de solicitar conocer, en cualquier momento, incluso antes de invertir en la educación y la formación necesarias, para conocer si sus antecedentes penales le inhabilitan para obtener la licencia; e (c) imponer al gobierno la carga de demostrar que una persona debe ser excluida de una ocupación para proteger la salud y la seguridad pública, en lugar de exigir a los exdelincuentes que demuestren por qué no deben ser excluidos.

**DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**1 **CAPÍTULO 1. – DISPOSICIONES GENERALES**2 **Sección 1.01. Título**

3 Esta ley se denominará "Ley para Uniformar la Evaluación de Solicitudes de  
4 Licencias Ocupaciones por Personas con Antecedentes Penales" con el propósito  
5 de establecer una política pública con parámetros uniformes para la otorgación  
6 de licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales e implementar  
7 un proceso de calificación previa que le permita a las personas con antecedentes  
8 penales conocer con anterioridad si las circunstancias particulares de su caso son  
9 un impedimento para la obtención de la licencia ocupacional a la que aspiran  
10 solicitar.

11 **Sección 1.02: Política Pública**

12 Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que las  
13 restricciones a la concesión de licencias ocupacionales para personas con  
14 antecedentes penales deben tener un objetivo limitado estrechamente ligado a  
15 aquellos antecedentes que demuestran objetivamente una incapacidad de llevar a  
16 cabo la ocupación a la cual se aspira por la naturaleza de los actos cometidos o  
17 que están directamente relacionados con los deberes y responsabilidades de la  
18 ocupación a la cual se aspira, siempre con el norte de que los requisitos  
19 reglamentarios impongan el mínimo de restricciones posibles sobre el ejercicio  
20 libre de determinada ocupación o profesión, siempre con el fin de proteger a los  
21 consumidores de daños presentes, significativos y corroborables.

1 En consecución de esta política pública la Asamblea Legislativa reconoce el  
2 derecho de toda persona a ganarse la vida mediante el ejercicio de sus  
3 habilidades, inventiva, profesión y ocupación y por lo tanto, reconoce que deben  
4 eliminarse de las leyes y reglamentos que regulan los procesos de otorgación de  
5 licencias ocupacionales términos ambiguos para evitar determinaciones  
6 arbitrarias y completamente subjetivas. Aquellas personas a las que se les  
7 deniegue una licencia ocupacional por razón de sus antecedentes penales deben  
8 recibir una explicación detallada enmarcada en la política pública antes descrita  
9 que le permita entender y comprender las razones para denegarle la licencia  
10 solicitada, así como un debido proceso de ley para cuestionar dicha  
11 determinación.

12 Las autoridades responsables de la otorgación de licencias ocupacionales deben  
13 establecer procesos vinculantes de precalificación para que los solicitantes  
14 puedan determinar si sus antecedentes penales representan un impedimento real  
15 para obtener determinada licencia ocupacional antes de invertir en la formación,  
16 la educación y los gastos necesarios para su obtención.

### 17 **Sección 1.03. Definiciones**

18 Para los propósitos de esta ley, los siguientes términos, frases y palabras tendrán  
19 el significado y alcance que se expresa a continuación:

20 **(a) Junta Examinadora:** Por "Junta Examinadora" se entiende el organismo  
21 gubernamental responsable de conceder, renovar, denegar, disminuir, limitar,

1           suspender, revocar, o retener de cualquier otro modo el reconocimiento  
2           estatal para ejercer determinada ocupación o profesión.

3           **(b) Ocupación lícita:** La ocupación lícita se refiere a cualquier vocación, oficio,  
4           profesión o campo de especialización que incluye la venta de bienes o  
5           servicios que no son ilegales, independientemente de si el individuo que los  
6           vende está sujeto a una reglamentación de licencias ocupacionales.

7           **(c) Licencia Ocupacional:** La licencia ocupacional significa una autorización  
8           intransferible en ley para que un individuo lleve a cabo una ocupación lícita a  
9           cambio de una compensación fundamentada en el cumplimiento de ciertos  
10          requisitos dispuestos mediante legislación. El requerimiento en ley de  
11          ostentar una licencia ocupacional para ejercer una ocupación lícita conlleva  
12          que todo individuo que ejerza dicha ocupación sin la debida licencia incurra  
13          en conducta ilícita.

14          **(d) Reglamentación de licencias ocupacionales:** significa una ley, reglamento,  
15          práctica o política que permite a una persona usar un título ocupacional o  
16          trabajar en una ocupación lícita. Incluye registro gubernamental, certificación  
17          gubernamental y licencia ocupacional. Excluye una licencia comercial, una  
18          licencia de instalación, un permiso de construcción o una reglamentación de  
19          zonificación y uso de la tierra.

20          **(e) Cualificación personal:** se refiere a los criterios relacionados con la persona  
21          que solicita una licencia ocupacional. Pueden incluir uno o más de los  
22          siguientes: el cumplimiento con un programa educativo aprobado,

1 desempeño satisfactorio en un examen, experiencia laboral, aprendizaje, otra  
2 evidencia del logro de los conocimientos y habilidades requeridos,  
3 aprobación de una revisión de antecedentes penales del individuo y  
4 cumplimiento con requerimientos de educación continua.

5 **(f) Reconocimiento estatal.** Por "reconocimiento estatal" se entiende la concesión  
6 o renovación por parte del gobierno de una licencia ocupacional o  
7 autorización para trabajar en una ocupación legal.

8 **Sección 1.04. Derecho fundamental.** El derecho de una persona a ejercer una  
9 profesión lícita es un derecho fundamental.

## 10 CAPÍTULO 2. – CONSIDERACIÓN DE LOS ANTECEDENTES PENALES

### 11 **Sección 2.01. – Alcance.**

12 (a) No obstante las disposiciones de cualquier otra ley, las Juntas Examinadoras  
13 utilizarán únicamente este capítulo para denegar, renovar, limitar, suspender,  
14 revocar o retener de cualquier otro modo una licencia ocupacional a una  
15 persona por razón de sus antecedentes penales.

### 16 **Sección 2.02. – Prohibición de Exclusión Automática.**

17 Ninguna Junta Examinadora podrá excluir automáticamente a una persona de  
18 los procesos de solicitud, evaluación, otorgación o renovación de una licencia  
19 ocupacional por el mero hecho de tener antecedentes penales.

### 20 **Sección 2.03. – Incluidos los antecedentes penales.**

21 La Junta Examinadora tomarán en consideración en los procesos de evaluación,  
22 otorgación o renovación de una licencia ocupacional aquellos antecedentes



1 penales que conlleven una convicción o declaración de culpabilidad por un  
2 delito grave no excluido o un delito menos grave violento.

3 **Sección 2.04. - Antecedentes penales excluidos.**

4 La Junta Examinadora no tomará en cuenta, ni podrá requerir a la persona que  
5 solicita la licencia ocupacional que divulgue la siguiente información:

6 (a) Delitos por los cuales la persona que solicita la licencia ocupacional  
7 cumplió o cumple su pena mediante un programa de desvío;

8 (b) un arresto que no culminó en alegación de culpabilidad o condena;

9 (c) una condena que haya sido sellada, anulada, desestimada, borrada o  
10 indultada;

11 (d) una falta cometida mientras era menor de edad;

12 (e) un delito menor no violento; o

13 (f) una condena de más de tres años por la cual el individuo no estuvo  
14 encarcelado, o una condena por la cual el encarcelamiento del  
15 individuo terminó más de tres años antes de la fecha de la  
16 consideración de la Junta, excepto una condena por un delito grave  
17 relacionado con:

18 1. un acto de agresión sexual;

19 2. incesto;

20 3. fraude criminal o malversación de fondos públicos o privados;

21 4. agresión grave;

22 5. robo;

- 1                   6. maltrato, negligencia o puesta en peligro de un menor;
- 2                   7. incendio provocado;
- 3                   8. robo de vehículo
- 4                   9. secuestro; o
- 5                   10. homicidio involuntario, homicidio y asesinato.

### 6                                   CAPÍTULO 3. – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 7                   (a) La Junta Examinadora solo podrá denegar, suspender, revocar o negarse a  
8                                   renovar una licencia ocupacional solicitada por una persona con antecedentes  
9                                   penales cuando los antecedentes penales del solicitante están directa y  
10                                  específicamente relacionados con los deberes y responsabilidades de la  
11                                  ocupación a la cual se aspira.
- 12                   (b) La Junta Examinadora tendrá en todo momento el peso de la prueba para  
13                                  establecer que existen elementos suficientes para sustentar de manera clara  
14                                  y convincente la determinación tomada.
- 15                   (c) Toda determinación de una Junta Examinadora deberá constar por escrito y  
16                                  fundamentada en elementos o criterios claramente definidos en su  
17                                  reglamentación. La utilización de criterios ambiguos o arbitrarios por parte  
18                                  de la Junta Examinadora al momento de evaluar la solicitud de una licencia  
19                                  creará una presunción en favor de la persona que la solicita.
- 20                   (d) La Junta Examinadora deberá concederle a la persona solicitante que se ha  
21                                  visto afectada por una determinación tomada al amparo de esta ley un

1 debido proceso de ley que deberá garantizar los siguientes derechos  
2 procesales:

3 1. Recibir una determinación por escrito de parte de la Junta Examinadora  
4 mediante la cual se le informa de manera clara y fehaciente al solicitante las  
5 razones para denegarle la licencia ocupacional solicitada por razones de sus  
6 antecedentes penales, con citas directas a la reglamentación emitida por la  
7 Junta Examinadora a esos efectos en cumplimiento con esta ley, así como  
8 una descripción detallada de los hechos en los cuales se fundamenta la  
9 misma, incluyendo la oportunidad de: (1) tener acceso al contenido del  
10 expediente de la Junta Examinadora bajo el cual se evaluó su solicitud y se  
11 tomó la determinación adversa, el cual deberá ser solicitado por la persona  
12 afectada por escrito dentro de los siguientes cinco (5) días laborables a  
13 contarse desde el recibo de la notificación adversa; así como; (2) solicitar  
14 reconsideración de la determinación de la Junta Examinadora en un termino  
15 no menor de quince (15) días a partir del recibo por parte de la parte afecta  
16 de la notificación de la determinación de la Junta Examinadora o de haber  
17 tenido acceso al expediente de su solicitud de así haberlo requerido.

18 2. el derecho a acudir al tribunal de apelaciones en revisión administrativa  
19 de la determinación final de la Junta Examinadora, en cuyo caso estará libre  
20 de todo costo de pago de sellos u aranceles de presentación en los  
21 tribunales.

- 1 (a) **Petición.** Una persona con antecedentes penales puede solicitar a una Junta  
2 Examinadora en cualquier momento, incluso durante su encarcelamiento o  
3 antes de obtener las calificaciones personales requeridas, que determine si  
4 sus antecedentes penales lo inhabilitan para obtener la licencia ocupacional a  
5 la cual aspira.
- 6 (b) **Contenido.** La Junta Examinadora deberá implementar un proceso  
7 reglamentario para atender este tipo de solicitud de calificación previa que  
8 deberá guiarse por la política pública y principios dispuestos en esta ley.
- 9 (c) **Efecto vinculante.** Una determinación de una Junta Examinadora que  
10 concluya que la persona solicitante pre calificada para obtener su licencia  
11 ocupacional por causa de sus antecedentes penales será vinculante para dicho  
12 organismo rector en cualquier decisión posterior relacionado a la misma  
13 persona y los mismos antecedentes penales evaluados por la Junta  
14 Examinadora, a menos que la Junta Examinadora determine que ha habido  
15 un cambio material en los hechos o información sometida que afecta  
16 adversamente la determinación previa y que justifica que dicha  
17 determinación sea reevaluada.
- 18 (d) **Determinación Adversa con Recomendaciones.** Si la Junta Examinadora  
19 determinase que los antecedentes penales de la persona que solicita una  
20 calificación previa le inhabilitan para obtener la licencia ocupacional  
21 solicitada, la Junta Examinadora podrá establecer los parámetros bajo los  
22 cuales podría otorgar la misma, incluyendo cualquier medida correctiva que

1 la persona que solicita la calificación previa pueda tomar para remediar la  
2 determinación adversa.

3 (e) **Solicitud revisada.** El peticionario podrá presentar una solicitud revisada que  
4 refleje la implementación de las medidas correctivas tomadas.

5 (f) **Nueva solicitud.** El peticionario podrá presentar una nueva petición a la  
6 Junta Examinadora luego de transcurrido un año desde la resolución  
7 definitiva sobre la petición inicial o desde la obtención de las calificaciones  
8 personales requeridas, cualquier que se cumpla primero.

9 (g) **Costo.** La Junta Examinadora puede cobrar una cuota al peticionario para  
10 recuperar sus costos que no exceda de \$100.00 dólares por cada petición. Si  
11 los ingresos del solicitante en el momento de la solicitud son iguales o  
12 inferiores al 300 por ciento del nivel federal de pobreza utilizado para  
13 determinar la indigencia por el tribunal de distrito del estado, no se cobrará la  
14 tasa.

## 15 CAPÍTULO 5. – INFORMAR

16 (a) El Departamento de Estado establecerá un requisito de información anual a  
17 todas las Juntas Examinadoras de:

18 1. el número total de personas que solicitan una licencia ocupacional o su  
19 renovación y a su vez, de ese número total, el número total de  
20 personas a las que se le ha concedido la licencia ocupacional y el  
21 número total de personas a las que se ha denegado;

- 1           2. el número de candidatos a cada examen requerido para la licencia  
2           ocupacional y, de ese número, el número de aprobados y el número de  
3           no aprobados;
- 4           3. el número de solicitantes de cada licencia ocupacional con  
5           antecedentes penales y, de ese número, el número de veces que cada  
6           Junta Examinadora concedió la misma, así como el número total de  
7           denegatorias, suspensiones o revisiones por causa de los antecedentes  
8           penales de una persona;
- 9           4. un listado específico de los delitos por los que cada Junta Examinadora  
10          denegó una solicitud;
- 11          5. número de solicitantes que han hecho peticiones a cada Junta según el  
12          Capítulo 6;
- 13          6. número de aprobaciones y denegatorias de cada Junta Examinadora en  
14          virtud de esta ley,
- 15          7. un listado específico de los delitos para los que cada Junta  
16          Examinadora aprobó o denegó peticiones en virtud esta ley, y
- 17          8. otros datos que determine el Departamento.

## 18   CAPÍTULO 6. – DISPOSICIONES FINALES

### 19       **Sección 4.01. – Cláusula de Cumplimiento.**

20       Se ordena a toda agencia, departamento o instrumentalidad del Estado Libre  
21       Asociado de Puerto Rico a crear, enmendar o derogar cualquier reglamentación  
22       vigente para cumplir con el propósito establecido en esta Ley.

1       **Sección 4.02. – Publicación e Implementación.** En el plazo de un año a partir  
2 de la promulgación de esta ley, todas las Juntas Examinadoras deberán actualizar  
3 sus reglamentos, formularios y demás documentos, así como publicar de manera  
4 efectiva y clara los derechos y obligaciones que esta ley impone, incluyendo en  
5 sus páginas o sitios en la web, y eliminar el lenguaje que entre en conflicto o  
6 contradiga esta ley.

7       **Sección 4.03. – Limitaciones.**

8       (a) Nada de lo dispuesto en esta ley se interpretará como:

9           (1) Eximiendo la aplicación de cualquier reglamentación federal;

10          (2) Requerimiento para que una organización de certificación privada  
11           otorgue o niegue la certificación privada a cualquier individuo; o

12          (3) Restringiendo la capacidad de una persona a usar el título "certificado" u  
13           otro título conferido por una organización de certificación privada que  
14           cumpla con los requisitos de esta.

15       **Sección 4.04. – Interpretación de Estatutos y Reglamentos.**

16       Al interpretar cualquier reglamentación gubernamental de licencias  
17       ocupacionales, incluyendo una ley, reglamento, política o práctica de licencias  
18       ocupacionales, se aplicarán los siguientes criterios de interpretación, a menos que  
19       la reglamentación inequívocamente diga lo contrario:

20       (a) Las reglamentaciones ocupacionales se interpretarán y aplicarán para ampliar  
21           las oportunidades económicas, fomentar la competencia y promover la  
22           innovación;

1 (b) Cualquier ambigüedad en las reglamentaciones ocupacionales se interpretará  
2 a favor de los solicitantes;

3 (c) El alcance de la práctica en las reglamentaciones ocupacionales debe  
4 interpretarse de manera restringida para evitar imponer cargas indebidas  
5 sobre las personas con requisitos reglamentarios que solo tienen una relación  
6 atenuada con los bienes y servicios que brindan.

7 **Sección 4.05. – Separabilidad.**

8 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,  
9 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de  
10 esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o  
11 sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente  
12 de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,  
13 subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección,  
14 título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada  
15 o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia  
16 de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,  
17 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de  
18 esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o  
19 sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente  
20 de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar  
21 válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa  
22 que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en



1 la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o  
2 declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto,  
3 invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o  
4 circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar  
5 la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

6 **Sección 4.06. - Vigencia.**

7 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.